



Bajo el Volcán

ISSN: 8170-5642

bajoelvolcan.buap@gmail.com

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
México

Castro Suárez, Roque

El golpe en Honduras. Ofensiva conservadora y resistencia

Bajo el Volcán, vol. 11, núm. 17, septiembre-febrero, 2011, pp. 43-74

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Puebla, México

Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=28625451005>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

EL GOLPE EN HONDURAS

OFENSIVA CONSERVADORA Y RESISTENCIA

Roque Castro Suárez

RESUMEN

En este artículo se analiza, por una parte, el golpe de Estado de 2009 desde una perspectiva histórica, en un país con una larga tradición autoritaria, con un Estado frágil donde el factor externo y en especial el papel de Estados Unidos será una constante fundamental. La misma instauración democrática en los años ochenta será una obra, principalmente de Estados Unidos, aceptada por el pacto de dominación oligárquico y con algún apoyo popular. Sobre este pacto de dominación oligárquica de raigambre histórica se podrán encontrar algunas de las explicaciones del golpe de Estado que tendrá lugar el 28 de junio de 2009. El golpe parece revelar que la sociedad hondureña cambió, pero no modificó algunos rasgos estructurales. Por otra parte se analiza los impactos del golpe y el surgimiento de la resistencia y sus principales retos.

Palabras clave: autoritarismo, golpe militar, democracia, resistencia, oligarquía.

SUMMARY

On the one hand, this article analyzes the 2009 military coup from a historical perspective: we have a country with a long tradition of authoritarianism and a fragile state, where the external factor, and especially the role of the United States of America, is a fundamental and constant feature. Even the instauration of democracy in the 80s was mainly the deed of the US, backed up by the complicity of oligarchic domination and some popular support. This agreement within the oligarchic tradition, which is deeply rooted in history, provides some explanations for the *coup d'état* which took place on June 28 and 29, 2009. The coup seems to reveal that, although the society of Honduras has indeed changed, it has not, however, modified certain structural features.

On the other hand, we have the analysis of the repercussions of the military coup and the emergence of the resistance, as well as its main challenges.

Key words: authoritarianism, military coup, democracy, resistance, oligarchy.

1. INTRODUCCIÓN. DE CÓMO LA HISTORIA CUENTA

Con una herencia colonial muy pobre, con una independencia política y social poco significativa, con un Federación centroamericana de alcances limitados, llegaron las guerras civiles, la inestabilidad política y la lucha de caudillos. La reforma liberal, pese algunos logros, permitió la consolidación del capital extranjero hasta 1960, momento en que aparece una burguesía local, pero incapaz de llevar adelante un proyecto nacional importante (salvo los avances del reformismo institucional y militar). El resultado fue un Estado precario (siendo el ejército la institución que más se fortaleció), sin recursos y con una base tributaria importante, lo que facilitó la subordinación de éste y de las élites al capital norteamericano; además de hacerlo dependiente del financiamiento externo, principalmente del estadounidense. Todo esto será determinante hasta conformarse como un eterno “aliado” político, lo cual aprovechará al máximo Estados Unidos. La hegemonía que la clase dominante hondureña logra en el periodo de modernización no cambia su carácter oligárquico, cuyos rasgos dominantes, además, penetran la forma democrática.

EL PODER OLIGÁRQUICO¹ Y ALGUNAS CONSTANTES

Si bien la élite hondureña terrateniente minera no logra imponerse sobre la naciente burguesía local, ésta hereda la tradición política de carácter oligárquico (uno de sus instrumentos son los partidos políticos), sólo que ahora con poder económico, resultado del proceso de modernización económica y de la integración de capitales que el capital extranjero permite para algunos de estos sectores. Esta burguesía local impone su hegemonía sin que Estados Unidos pierda, por distintas razones, como el poder militar, su capacidad de influencia. El Estado será fundamental así

como la sobreexplotación de la mano de obra en el proceso de acumulación. Aceptan la reforma en tanto el alcance de la misma es limitado y no afecta los procesos de acumulación. El pacto de dominación oligárquica puede mantenerse en el periodo democrático siempre que la democracia no afecte la lógica del modelo. Si bien el patrón de acumulación tradicional se modifica a partir de 1990, la forma de control de los partidos y del Estado no sufre cambios sustanciales.

EL AUTORITARISMO, EL ANTICOMUNISMO Y LA REPRESIÓN FRENTE A LAS LUCHAS POPULARES

Desde la perspectiva popular, si bien ya había surgido en 1932 el Partido Comunista (otros autores, como Molina Chocano, ubican la fundación del PC en 1922), había antecedentes de huelgas en las minas de San Juancito en 1914, cuando además se alzaban banderas contra el imperialismo en Latinoamérica.² En 1925 se realiza una huelga de trabajadores. Posteriormente, en los campos bananeros, en 1932 y 1933, ocurrieron nuevas huelgas. Las luchas del proletariado pasarán entonces, dado el contexto, a la clandestinidad (Carias, 2007), pero desde aquí se reorganiza el movimiento sindical, y tendrán lugar grandes manifestaciones, los días 29 de mayo y 4 y 6 de julio de 1944, contra la dictadura de Carias. Participaron mujeres en las manifestaciones, las cuales, por lo general, estaban dirigidas por ellas. La represión no se hizo esperar, murieron cerca de cien personas y fueron registrados centenares de heridos. Estos acontecimientos, sin embargo, contribuyeron a debilitar el régimen de Carias (Molina, 1998:242) hasta su caída en un contexto de crisis de las dictaduras centroamericanas.

Importante organización y movilizaciones obreras, campesinas y magisteriales tendrán lugar después de la Huelga histórica de 1954. Estas organizaciones, dentro del contexto externo de la Guerra fría, el triunfo de la Revolución cubana y el surgimiento de una burguesía local importante, se convierten en factores de presión y de reacomodo en términos de acumulación de capital, para el periodo de las más importantes reformas institucionales y de inclusión social que ha tenido la sociedad hondureña.

Sin embargo, las movilizaciones populares tuvieron su costo. Ya desde el gobierno de Carias se declara a todas las organizaciones de trabajadores, aún no reconocidas legalmente, como comunistas. Se prohíben las huelgas, varios dirigentes son reprimidos, encarcelados y expulsados del país (Molina, 1998:241). En la huelga de 1954 la UFCO acusó de comunistas a los dirigentes; se inculpó de supuesta injerencia a Guatemala en esta huelga, lo cual se convirtió en otro pretexto para apoyar y lanzar la ofensiva desde Honduras contra Arbenz. A Villeda Morales se le acusa también de que su gobierno mostraba rasgos comunistas; esto se usó como pretexto para su derrocamiento en el golpe de Estado de 1963.

Una proclama de las FFAA de 1963 señala que es necesario poner fin a la infiltración comunista que amenaza seriamente la democracia, la vida, la propiedad y los sentimientos religiosos de la población (Arancibia, 1988: 68). En 1972 tiene lugar la masacre de la Talanquera.

Incluso en la primera etapa del reformismo militar (1972-1974), el gobierno militar no deja de tener un carácter contrainsurgente que se profundiza en su segunda etapa (1975-1979), aun cuando la crítica se centra en el anarquismo y las ideas disociadoras. En su momento las empresas transnacionales se opusieron a la reforma agraria, así como los terratenientes agrupados en la FENAGH. En esta etapa tendrá lugar la masacre de los Horcones en 1975. Crece la represión con la crisis en la que entra el poder militar en medio de la corrupción, de la implicación de militares en el narcotráfico. La represión se dirige principalmente contra los sectores que habían sido la base social del reformismo en la etapa anterior. Varios dirigentes de la empresa campesina de Isletas fueron reprimidos y asesinados, la empresa sometida a control militar, los centros universitarios resultaron amenazados; así ocurre la quema del taller de publicaciones de la UNAH en 1976, entre 1976 y 1977 se prohíben las protestas públicas de estudiantes y maestros (Barahona, 2005: 230).

En 1956, el presidente Lozano Díaz también acusa a las organizaciones de estar infiltradas de comunistas (Molina, 1998). En 1962 se rompen relaciones con Cuba. En 1959 se prohíben publicaciones que socaven el orden democrático. Durante el gobierno de Villeda Morales se busca fortalecer las organizaciones “democráticas” contra las marxistas (Arancibia, 1988: 62).

En los años ochenta y noventa, primero en el marco de la guerra en Centroamérica y, segundo, en el marco de las políticas neoliberales, la represión y desaparición de personas, la división y desmantelamiento de organizaciones y el asesinato de dirigentes populares serán constantes en este periodo.

LA IMPORTANCIA DEL CAPITAL EXTRANJERO Y DE ESTADOS UNIDOS

De larga vida en la historia de Honduras (comparativamente con menor presencia en la historia de los otros países centroamericanos), sólo comienza a modificarse con el surgimiento de una burguesía nacional a partir de la década de los sesenta, y es importante en la conformación del aparato estatal y en el carácter que asumen la élites nacionales. Según Euraque, la vieja oligarquía terrateniente minera que se había formado en la segunda mitad del siglo XIX nunca fue capaz de imponer su hegemonía en el Estado moderno; fue más bien un caudillismo que, a través de los partidos tradicionales, llegó a monopolizar los espacios de poder. Además, esta élite fue incapaz de disputar los espacios económicos más importantes en el siglo XX que fueron ocupados por extranjeros y por migrantes árabe/ palestinos que llegaron a Honduras principalmente a partir de 1950 (Euraque, 1996: 46).

De esta manera es difícil entender la historia del país sin tomar en cuenta el papel que ha jugado Estados Unidos en la región centroamericana.

En el caso particular de Honduras, Estados Unidos ha tenido presencia a través de las empresas que durante el enclave minero y bananero controlaron el principal producto de exportación. El caudillismo local aprovechó la fragilidad del Estado (como herencia de la Colonia y de la fracasada República) del que a su vez eran producto y productores; establecieron relaciones con el capital norteamericano a cambio de lograr apoyo para llegar o permanecer en el poder. Así, con una élite subordinada, la fragilidad del Estado se profundizó. Unos y otros se favorecieron del Estado que contribuyeron a diseñar.

Como la reforma liberal, el gobierno dictatorial de Carias (1933-1948) se encargará de imponer la paz (por medio de la represión) y de paso

favorecer los intereses del enclave. Como sus vecinos centroamericanos (Ubico, Martínez y Somoza), el gobierno de Carias jugará un papel importante en la política del Buen Vecino de Roosevelt de 1933.

Ya desde 1945, por obra de Estados Unidos, se trabaja la idea de crear profesionalmente el ejército hondureño como un posible aliado para enfrentar las amenazas comunistas. Cabe destacar que el ejército se creó con fines externos, pues para uso interno era necesario pedir permiso a Estados Unidos (Carias, 2007: 270).

Posteriormente, a partir de 1953, Estados Unidos establecerá relaciones con las Fuerzas Armadas a quienes contribuye a organizar. Desde que ese país preparaba la intervención para derrocar al gobierno reformista de Jacobo Arbenz de Guatemala en 1954, invasión que se realizara desde Honduras, el ejército comenzó a recibir un fuerte apoyo estadounidense. Este apoyo continúa y se fortalece con la amenaza que experimenta Estados Unidos cuando triunfa la Revolución cubana en 1959. Durante el reformismo militar se mantendrán también buenas relaciones, fortaleciéndose éstas con el apoyo que recibe el ejército en la década de los ochenta, en el marco de la guerra en Centroamérica. Como había ocurrido contra el reformismo guatemalteco, Honduras se convirtió en principal aliado de Estados Unidos en la región para derrocar a los sandinistas y la insurgencia salvadoreña.

En el marco de la Alianza para el Progreso se incrementa el financiamiento de EUA (también participan el BID y BM), el cual con leves modificaciones se mantiene hasta la actualidad. Se trata de un país que nació endeudado y que las empresas del enclave minero y bananero profundizaron esa situación: dichos enclaves no fueron contribuyentes que modificaran la estructura fiscal existente. Las concesiones más las exenciones arancelarias fueron la norma con estas empresas entre mediados del siglo XIX y 1950. Las empresas bananeras fueron más bien prestamistas del gobierno hondureño. Ya en los años sesenta hasta mediados de la siguiente década, la actividad cafetalera aportaba más que las empresas bananeras (Eurauque, 1996).

Las relaciones entre Honduras y Estados Unidos tuvieron tal magnitud durante la guerra en Centroamérica, en la década de los ochenta, que profundizaron la subordinación de las élites (considerando que en Honduras

es difícil establecer la diferencia entre élite política y élite económica y son muy densas las redes, incluso familiares, que se establecen entre ellas), como en los peores tiempos del enclave bananero. Las élites nacionales como el capital extranjero aprovecharon este contexto de fragilidad estatal para hacer sus negocios y establecer los arreglos políticos necesarios desde el bipartidismo que cobraba protagonismo con la naciente democracia contrainsurgente que el mismo Estados Unidos había diseñado para la región centroamericana. En el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en el contexto de la Guerra fría, la sociedad hondureña se militarizó y la represión se intensificó.

A esta situación se suma el endeudamiento acumulado que tanto alimentó el enclave como la naciente burguesía local y que, posteriormente, Estados Unidos y las mismas élites locales aprovecharon en términos políticos y económicos desde la definición de políticas neoliberales. Así llegamos a los años noventa con un Estado precario, con una democracia tutelada y frágil, con un movimiento social reprimido, desgastado y en parte dividido, en donde su propia historia interna es también importante.

EL PODER MILITAR

Las dificultades de la sociedad tradicional hondureña en la conformación de un Estado moderno, con una economía de enclave, desarticulada de la economía tradicional de subsistencia casi hasta los años cincuenta del siglo XX, sin una burguesía local importante, dio paso a los caudillismos regionales y locales que a través de la violencia y guerras civiles que se disputaron el poder político como la única forma de tener acceso a un tipo de poder en una sociedad dominada por los enclaves, facilitaron la emergencia del poder de las FFAA, como una de las pocas instituciones que en el país, paradójicamente para la democracia, lograron consolidarse.

Como se ha mencionado, surgieron con el apoyo de Estados Unidos en el contexto de la Guerra fría, pronto se convirtieron en un factor de poder fundamental en la vida política y económica del país. Después de una breve crisis política, cuando el presidente Lozano Díaz intentó continuar en el poder, dieron su primer golpe de Estado en 1956. Luego, en 1957,

lograron el estatuto de autonomía después de que, a cambio, apoyaron la llegada del presidente Villeda Morales en elecciones de segundo grado. Los militares tenían entonces una especie de poder de veto en relación a las decisiones del presidente. En una proclama señalarán que el pueblo y el ejército se convierten en las fuerzas supremas de donde surgirá una nacionalidad más rica y más poderosa.

Luego, en 1963, dan otro golpe bajo la excusa del comunismo del presidente Villeda Morales, pero la razón de fondo fue la amenaza a los privilegios logrados con la autonomía, después de que en un intento de golpe los militares no dieron el apoyo esperado y el propio presidente tuvo que crear una guardia civil como poder militar paralelo.

Aunque en el gobierno militar, en 1962, se había decretado una Ley de Reforma Agraria que pronto cedió ante las presiones de los terratenientes y las empresas bananeras (Barahona, 2005:192) y que después de la guerra entre Honduras y El Salvador en 1969, donde los militares perdieron credibilidad por su inoperancia, el sentimiento de unidad nacional que la misma guerra había provocado llevó a un proceso electoral y a un gobierno de unidad nacional en 1971. Pero el pacto entre los dos partidos tradicionales no funcionó, lo cual hizo aparecer de nuevo en escena a los militares, quienes en 1972 vuelven a dar otro golpe de Estado, esta vez para continuar el proceso reformista con apoyo popular. Cabe destacar que la estrategia de poder dividido que se había generado en 1956 se siguió manteniendo, aun con el aparente poder de los civiles. Los militares, de todas formas, fueron históricamente aliados del Partido Nacional como ocurrió cuando en 1965 el general López logró que este partido, en una Asamblea Nacional Constituyente, lo nombrara presidente (Arancibia, 1988: 72).

Aun cuando se trata del proyecto de reforma social (junto al proceso de reformas iniciadas a partir de la huelga de 1954) más importante de la historia del país, dado su carácter incluyente de los sectores sociales, con beneficios importantes para una parte del campesinado hondureño, esta reforma no modificó la estructura de la tenencia de la tierra. Sin embargo, después que el gobierno militar de Oswaldo López se involucrara en un escandaloso soborno por parte de las empresas bananeras, este militar tuvo

que ceder el mando en 1975 al general Juan A Melgar. Mientras, el proceso de reformas se vio interrumpido (prueba de ello son las dos masacres de campesinos ocurridas en 1972 y 1975, más las contradicciones internas entre militares jóvenes y la vieja oficialidad), los militares continuaron con cuotas importantes de poder político. Seguían, por tanto, acumulando poder político y, por supuesto, poder económico.

Pronto, en el contexto de la toma del poder por los sandinistas en 1979 en Nicaragua, Honduras nuevamente ocupará el lugar estratégico que deseaba Estados Unidos para contener la insurgencia salvadoreña y derrotar la Revolución sandinista. Mientras Honduras se presentaba como un nuevo modelo democrático y ante las necesidades de la instauración democrática, los militares se ven en la necesidad de negociar con Estados Unidos un mayor apoyo a cambio de crear las condiciones para la nascente democracia. De esta manera los militares continúan siendo protagonistas y formarán parte de la famosa trilogía del poder en la década de los ochenta en Honduras: la embajada de Estados Unidos, los militares y el gobierno del Partido Liberal.

Desde los años noventa en adelante, cuando la Guerra fría al parecer llegaba a su fin, los militares ya no parecían ser tan indispensables. Cedían poder político, pero contaban con poder económico. Un estudio de Mario Flores sobre *El Capital Financiero en Honduras*, los situaba entre los 26 grupos económicos más importantes de las década de los ochenta. De alguna forma se habían preparado para la transición y para “competir” en la nueva lógica de los mercados, eso sí, con todas las ventajas que da el poder económico y político acumulado.

2. LAS CARACTERÍSTICAS Y LAS CAUSAS DEL GOLPE

El 28 de junio de 2009 en Honduras ocurrió lo inesperado. En la madrugada de ese día en Tegucigalpa, el presidente Manuel Zelaya fue asaltado en su casa por militares fuertemente armados, quienes por “órdenes superiores” lo trasladaron a Costa Rica. Había ocurrido un golpe de Estado, quizá atípico, casi descartado en cualquier análisis serio sobre la política en América Latina. Costa Rica, por su parte, hacía gala de su hospitalidad

democrática y, como en otras ocasiones, recibía a un presidente hondureño derrocado. Este mismo país jugaría un papel importante en la política estadounidense con el dialogo de San José, otra vez como en tiempos de la guerra en la región.

Por otro lado, el papel que tuvieron los medios de comunicación dio la impresión de ser un golpe bien planificado que reveló con ello todas sus intenciones. Los medios de comunicación más influyentes, desde la noche anterior y el mismo día del golpe, comenzaron a jugar su papel de encubrimiento, sin dar cobertura a la noticia y luego señalando que en Honduras no había pasado nada, que se trataba de una “sucesión presidencial”, dando lectura a una “renuncia” aparentemente falsa del presidente Zelaya y destacaban, además, que por los incumplimientos de Zelaya asumían las “nuevas autoridades”. Mientras los medios del golpe hacían su trabajo, otros medios más independientes (como Radio Progreso, Radio Uno, Radio Globo y Canal 36, estos últimos más cercanos al presidente Zelaya) eran cerrados y ocupados por militares. Así los medios del golpe jugaron un papel decisivo en el sostenimiento del mismo y los otros medios, menos influyentes, fueron también importantes para la resistencia.

En el golpe también participaron la cúpula religiosa de la Iglesia católica e iglesias no católicas. Estos sectores religiosos conservadores (principalmente el cardenal Rodríguez, otrora candidato a Papa), como parte de la planificación señalada, aparecieron en cadenas televisivas realizando un papel análogo al que realizaron los medios. Se recuerda como indignación para la resistencia y bendición para la derecha, la aparición en cadena nacional del cardenal Rodríguez unos días después del golpe, señalando que si Zelaya regresaba al país aquí habría un baño de sangre, profecía cumplida cuando en horas de la tarde era asesinado Isis Obed, un joven de 17 años, quien como miles de hondureños, en una movilización sin precedentes, esperaba en el aeropuerto la llegada del presidente Zelaya, en su primer intento fallido por ingresar al país. La organización del golpe permite ver la forma cohesionada con que se presenta la clase dominante hondureña.

El golpe había sido el resultado de una combinación de factores. En el plano económico el gobierno de Zelaya se caracterizó por el rompimiento

con el monopolio de empresas que controlaban la importación de combustibles, el aumento en 60% al salario mínimo, la eliminación de intermediarios en las compras estatales de medicinas y armas, el acuerdo de PETROCARIBE y posteriormente la firma del ALBA; de esta forma el nuevo giro del gobierno de Zelaya en asuntos económicos tenía implicaciones no sólo para la más atrasada de las oligarquías latinoamericanas, sino también para las empresas transnacionales y para la política de Estados Unidos.

En el plano político, el presidente Zelaya había tomado distancia de los sectores más tradicionales de su partido (el Partido Liberal) y del resto de líderes del otro partido (el Partido Nacional). También se negó a enviar al Congreso el presupuesto para su aprobación y entró en tensiones con la Corte Suprema de Justicia en relación con los temas del combustible. En más de una ocasión señaló que los poderes fácticos no lo dejaban gobernar. Hay que destacar que ambos partidos han conformando un bipartidismo histórico, muy acostumbrados a establecer acuerdos sobre algunas cuestiones políticas fundamentales del país. No obstante, el giro político del presidente Zelaya hay que entenderlo no desde fundamentos ideológicos, sino desde un pragmatismo coherente con una forma particular de ser de su liderazgo.

Ahora bien, el gran detonante, y sobre el que los grupos de poder justifican el quiebre democrático, fue que el presidente Zelaya, desde las elecciones primarias de 2008, había promovido la idea de colocar una cuarta urna en estas elecciones con el fin de que los votantes definieran el apoyo o no a una nueva Constitución del país. Como la propuesta de Zelaya no había madurado, además del estruendoso ruido que generaba en la opinión pública, posteriormente el presidente fue fructificando la idea hasta proponerla como consulta popular para el 28 de junio de 2009, unos meses antes de que tuvieran lugar las elecciones de noviembre de ese año. La propuesta de Zelaya entró en un debate político y legal donde los grupos de poder tradicionales que controlaban el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la República declararon ilegal la consulta, misma que el presidente hacía basar en la Ley de Participación Ciudadana. Además, los grupos promotores del golpe

argumentaban que Zelaya, con su iniciativa, buscaba perpetuarse en el poder. Con todo esto, el conflicto no legal sino político estaba planteado.

Y como si lo anterior fuera poco, el presidente Zelaya entró en tensiones con las Fuerzas Armadas, a quienes desde un principio había apoyado notablemente. Dos días antes de que tuviera lugar la consulta (denominada “encuesta” para evitar las trabas legales), Zelaya destituyó al jefe de las Fuerzas Armadas, precisamente porque se había negado a apoyar la consulta. En este marco, los militares, “humillados” por el presidente, tomaron partido por la “legalidad” de los golpistas y cumplieron la orden de sacar a Zelaya del país. Todo lo anterior, por supuesto, con la bendición de Estados Unidos, que posteriormente contribuyó a sostener el golpe (pese a las medidas tomadas y la supuesta promoción del diálogo) contra un presidente que se había acercado demasiado a Chávez y a los proyectos de izquierda en América Latina.

Paradójicamente, como consecuencias no deseadas de la acción, el golpe fracturó y debilitó el bipartidismo hondureño y llevó la lucha política a un nuevo escenario, que debido a la polarización existente, le da sentido a la política hondureña que se había anquilosado en el bipartidismo, sin avances sustanciales para la democracia.

Por otro lado, el mismo golpe, como otra consecuencia no deseada de la acción, de forma paradójica salvó también, en gran medida, al movimiento popular, que no había logrado en la presente década (sin desconocer las movilizaciones sectoriales de maestros, ambientalistas y la huelga de hambre contra la corrupción sólo indirectamente vinculadas) ninguna lucha y articulación social importante.

El golpe de Estado supone una ofensiva conservadora que permite a la élite económica y política así como al poder militar recuperar posiciones y establecer el control de espacios estratégicos de poder en el país. Entre los principales espacios y mecanismos es posible destacar: la promoción de una nueva ley de educación, la eliminación del decreto 08-2008, *desindexar* el salario mínimo de los Estatutos de maestros y profesionales, la suspensión del Estatuto del Docente, el control de la energía eléctrica (principalmente los contratos por energía renovable) por parte de la empresa privada, el uso de recursos para otros fines y sin transparencia de

los Institutos de Previsión Social, romper acuerdos del ALBA, retroceder o *darle largas* al proyecto de creación de un aeropuerto en la actual base estadounidense de Palmerola, el aumento de los combustibles al retornar a la vieja fórmula que permite el monopolio en la importación de este producto, criminalizar la protesta social para dismantlar sindicatos, la propuesta de Ley de regulación religiosa, la recuperación por empresarios de tierras sujetas a la Reforma Agraria, y de forma más reciente la propuesta de aprobación de la Ley Antiterrorista para destruir al Frente Nacional de Resistencia Popular.

3. LAS ELECCIONES DEL GOLPE. GOLPE A LA DEMOCRACIA

Después de que el diálogo nacional fracasó, como estrategia de los sectores golpistas y del propio Estados Unidos, y que no fue posible la restitución del presidente Zelaya, las posiciones volvieron a dividirse entre los defensores del golpe de Estado que apoyaban las elecciones y los que contrariamente se oponían a ellas porque no era posible pensar en elecciones sin restitución y porque las condiciones de las mismas no eran favorables a una práctica democrática.

Así las elecciones fueron militarizadas, al mismo tiempo que organizaciones de la resistencia eran perseguidas y saqueadas sus instalaciones. Los mismos que dieron el golpe de Estado, responsables de asesinatos y de las más graves violaciones de los derechos humanos, se convirtieron en los guardianes del proceso electoral y de la democracia. Todo ello con la complicidad y el apoyo de Estados Unidos, quien una vez más dejaba claro su compromiso y responsabilidad en el mencionado golpe.

En estas condiciones la resistencia llamó a sus miembros a no participar en las elecciones y así, mientras los defensores del golpe celebraban elecciones supuestamente para acabar con éste y olvidarlo, la resistencia no podía sino entender esta situación como una continuidad de lo ocurrido el 28 de junio, puesto que la crisis política no se había resuelto, muy a pesar de que Estados Unidos promovía y reconocía un gobierno de reconciliación nacional y el nuevo gobierno, consecuentemente, asumió su rol

reconciliador y estableció un “Plan de Nación” y un supuesto gobierno de unidad nacional.

Aun cuando estaban programadas con anterioridad al golpe, las condiciones en que tuvieron lugar las elecciones el 29 de noviembre de 2009 las convirtieron en el instrumento político para “salir” de la crisis, pero también en el pretexto para evitar la restitución del presidente destituido.

Si bien la democracia hondureña es básicamente electoral sin alternancia al bipartidismo tradicional y conservador, situación que el país “celebra” de forma ininterrumpida desde 1981 cuando se inaugura el periodo “democrático”, esta vez las elecciones tuvieron condiciones particulares: coincidentemente programadas en relación al momento en que ocurrió el golpe, sirvieron para ganar tiempo a los promotores de éste y a los sectores que lo apoyaron; fueron elecciones programadas y apoyadas sólo por los “golpistas”, tanto dentro del país como fuera de él; estuvieron militarizadas; mantuvieron bajo perfil competitivo porque uno de los principales partidos del esquema bipartidista (el Liberal del cual era miembro el presidente Zelaya) se dividió con la crisis y sólo un sector que apoyaba el golpe decidió participar; fueron elecciones con una considerable renuncia de candidatos a distintos cargos de elección popular, sólo un sector minoritario de la Resistencia contra el golpe (una facción del Partido Unificación Democrática) participó en las elecciones, es más, la Resistencia llamó a no participar en éstas; las elecciones se dieron sin que se lograra la restitución del presidente Zelaya. Sólo el mediano plazo con los acuerdos de Cartagena y el retorno del presidente Zelaya, la gobernabilidad y las condiciones de crisis pasaron a otro nivel.

Como se puede observar, los procesos electorales no se han interrumpido, aunque dadas las características del último, el conflicto político tras el golpe desborda las posibilidades de las elecciones por la división existente en el país, que no deja de ceder ante los recursos del poder que imponen su normalidad. Así, la democracia no puede avanzar por el tipo de elecciones y porque, además, no se busca resolver el conflicto que, dicho sea de paso, cuestiona el modelo de democracia representativa hondureño (sin transparencia, excluyente social y políticamente; sin capacidad para canalizar los conflictos, la complejidad social y el pluralismo).

Con la crisis ha quedado demostrado que el modelo de democracia hondureña no posee mecanismos democráticos no tradicionales para resolver los conflictos y los que tiene han sido diseñados, más que para promover la participación, para controlarla, tal y como se puso en evidencia con la aprobación del plebiscito y el Referéndum, siempre manipulados por la derecha en el poder, aun la reciente reforma al artículo 5 de la Constitución. Precisamente, la propuesta del presidente Zelaya, como consulta primero y encuesta después, no contemplada en las figuras de democracia directa señaladas y sobre todo cuando aparecen liderazgos particularistas (como el del mismo Zelaya), da cuenta de los límites de la democracia representativa. Cabe preguntarse por qué en la misma situación del presidente Zelaya, en el conflicto que se generó, antes de la salida militar, fue difícil encontrar una salida negociada. Esta situación, en parte, se explica por la ausencia de mecanismos adecuados y confiables para la solución de conflictos de esta naturaleza (además de la ausencia de mecanismos de control de la gestión pública) y, sobre todo, por el carácter que adquirió el conflicto por las medidas tomadas por el presidente Zelaya, más las características de su liderazgo, hasta infundir miedo en la derecha promotora del golpe, porque según ellos Zelaya pretendía, con la consulta, mantenerse en el poder.

Por otro lado, hasta dónde, con el conflicto desatado con el golpe, las élites envían un mensaje sobre las posibilidades del cambio que de todas formas está planteado. Parecen indicar que éste sólo será posible dentro del “marco legal” y si las cosas se complican para sus intereses, están dispuestos a usar todos los recursos necesarios tal y como sucedió con el golpe militar. Para la resistencia, por su parte, el cambio necesita ser cuidadosamente planificado en el marco de las leyes conservadoras, y cuando lo primero no sea posible deberá forzar la ruptura de esas leyes desde la movilización social o como fuerza política. Esta es una de las grandes tensiones que vive la política hondureña.

4. “A SUS ÓRDENES MI CAPITAL”. SE FORTALECE EL PODER DE LOS MILITARES

Los militares, descontentos con el presidente Zelaya porque había destituido a su máximo jefe, se alinearon rápidamente con los sectores promotores

del golpe quienes, a su vez, lo restituyeron en el cargo. Lo más grave del asunto es que sin la actuación de los militares, el golpe no hubiese ocurrido ni tampoco se habría consolidado; gracias a ellos no pudo ser revertido.

Los militares, quienes en los años ochenta se encargaron de la aplicación de la Doctrina de la Seguridad Nacional, en los años noventa (y buena parte de la presente década), se retiraron, obligados por las circunstancias, a los cuarteles y a los negocios desleales que obtuvieron en su época de oro. Reaparecen en la escena política, esta vez para apoyar y dar un golpe de Estado. Justo cuando parecía que se habían modernizado y se había comenzado a creer en su reconversión retomaron su nefasto papel represor, se aliaron, otra vez, con la oligarquía más atrasada del continente y se pusieron a la orden de una dudosa institucionalidad controlada por esta élite.

Los militares que durante los tiempos de la Guerra fría “desaparecieron” a más de 180 hondureños, detuvieron y torturaron a centenares de opositores del régimen de turno, de nuevo asesinan a más de un centenar de personas, detienen y torturan a otras tantas que se oponen al golpe de Estado. En este contexto, los militares se ponen de lado de una élite y en contra de un gran sector de la población, en su mayoría pobre, que creía en el proyecto de democracia participativa promovida por Zelaya. Como destaca Leticia Salomón (2009), mientras protegían a los que marchaban para defender el golpe, reprimían a los que se oponían al mismo.

Durante el golpe, la “misión” de los militares no sólo consistió en sacar por la fuerza de su casa y del país al presidente Zelaya, además de reprimir a todos los que se oponían al golpe, sino también en asaltar medios de comunicación, militarizarlos y sacarlos del aire. Era algo impensable, como el mismo golpe, en pleno siglo XXI.

Como nunca ocurrió en la historia del país, ni en los peores tiempos de guerra en la región y en el contexto de la Guerra fría, los militares generaron un despliegue de fuerzas sin precedentes, convocaron a los reservistas para atender el llamado patriótico, también a los militares en retiro, aquéllos que habían participado en la Guerra fría, y además contrataron guardias de seguridad de empresas dirigidas por ex militares. Se armaban con todo frente a un pueblo consciente y desarmado que hacía

oposición de forma pacífica. Llama la atención que los militares y policías nunca se habían organizado como esta vez, tal como se hubiese deseado para combatir el crimen organizado en un país que tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

Como si lo anterior fuera poco, en el marco del golpe de Estado la policía se subordinó a los militares, quienes a su vez dirigían todas las operaciones, dando al traste con uno de los aparentes logros más reconocidos del proceso de democratización: la desmilitarización de la policía. La realidad, sin embargo, mostró que tal logro no superó la simple formalidad. Adicionalmente, el “nuevo gobierno” nombró también como ministro de Seguridad a un ex militar que ya había fracasado en su política de “cero tolerancia” durante el gobierno de Ricardo Maduro. Este ministro llegó a declarar, al inicio de su gestión, que a la resistencia hay que exterminarla y él mismo es el promotor de la Ley antiterrorista.

Los militares también se encargaron de crear las “condiciones”, esta vez no para que las elecciones fueran “limpias”, sino para evitar la interrupción de las mismas en tanto su realización significaba olvidar el pequeño *lapsus* del golpe y volver a la normalidad.

De forma consecuente con lo anterior y fundamentalmente con la alianza que habían efectuado con los sectores de poder y las instituciones del Estado (Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público), montaron un juicio que eximió de responsabilidad a los militares, justo antes de que asumiera el “nuevo gobierno”. Es decir, fueron juzgados por el mismo gobierno de facto que ellos originaron y que “patrióticamente” sostuvieron.

Así, el día 27 de enero de 2010, mientras la mayoría de la población, la cual superaba con creces a la que asistió a la toma del poder del “nuevo gobierno”, acompañaba y despedía al presidente Zelaya, todos los militares (que al parecer superaron la asistencia de la población civil) acompañaban esta toma de posesión como los nuevos ciudadanos de la democracia hondureña.

El “nuevo gobierno” por su parte, no se sabe bien si por agradecimiento a su labor “patriótica” o para evitar nuevos golpes o porque la acumulación de poder de los militares durante el golpe lo permite, nombró al ex jefe de las Fuerzas Armadas (el mismo que organizó la ejecución del golpe) como

gerente de HONDUTEL, una empresa estatal de carácter estratégico, no sólo por su importancia económica sino también por su relevancia en términos de seguridad. También fueron designados militares en instituciones antes dirigidas por civiles, como FOSOFI, Aeronáutica Civil, Migración, Marina Mercante y se nombraron militares como comisionados en las distintas regiones del país.

Todas estas instituciones, que durante el periodo democrático estaban bajo el control de civiles y que, dicho sea de paso, eran consideradas uno de los logros más importantes de la democracia, fueron rescatadas por los militares.

El nuevo gobierno, confirmando lo anterior, aumenta también el presupuesto de las Fuerzas Armadas, reconociendo así el poder que éstas han acumulado, creando a su vez, las condiciones que eviten cualquier posibilidad de un nuevo golpe.

En este contexto, en el primer semestre de 2010, la represión, la criminalidad, la violencia y la inseguridad se han vuelto más complejas. Por un lado, de forma no velada, parece existir un pacto entre militares y los sectores de poder para proclamar mediáticamente un gobierno de reconciliación nacional, aunque continuará la represión y el asesinato de los miembros de la resistencia. Por el otro, crece aceleradamente la violencia y los asesinatos en el marco de las acciones represivas de la policía y los militares y en las que participa también el crimen organizado, generando así una gran confusión, con investigaciones politizadas, sin esclarecer los hechos, hundiendo en la mayor vergüenza toda posibilidad de la existencia de un Estado de derecho.

El golpe de Estado ha cobijado también el fortalecimiento de estructuras paramilitares, como la que opera en la zona atlántica del país al servicio del empresario Miguel Facusse, quien apoyó el golpe. Este empresario que se disputa tierras con campesinos de la zona del Aguan, ha contratado mercenarios colombianos, ex militares y opera con la tolerancia y el apoyo de la policía y el ejército. Mientras el Instituto Nacional Agrario ha declarado que las tierras son propiedad del Estado y que están sujetas a reforma agraria, el empresario se declara propietario y sus guardias han asesinado, desde septiembre de 2009, decenas de campesinos sin que

se deduzcan responsabilidades penales para los culpables, llevando más bien a un agravamiento del conflicto en el que, además, varios guardias han muerto.

Los militares y policías también aprovecharon el golpe para quedarse con 90 y 30 millones de lempiras respectivamente que el presidente Zelaya había autorizado para la realización de la Consulta Popular que, como se sabe, no se realizó. Al respecto, tanto militares como policías, así como el régimen golpista, dieron por entendido que se trataba de un pago por los servicios prestados. Los propios empresarios también aportaron sus cuotas al servicio de los militares.

En fin, toda esta realidad da cuenta de una “muerte de la política”, y permite observar que las salidas militares a las crisis políticas, promovidas por las élites más tradicionales y por aquella población orientada también por una cultura política autoritaria de corte tradicional, consecuentemente indica que no se modernizaron los militares ni las élites políticas y económicas, ni tampoco el sector de la población que apoyó el golpe. De forma lamentable este sector y aquellos que lo apoyaron, no han podido entender hasta hoy que los problemas de la democracia se resuelven en el marco de la democracia, con más política democrática y sólo con más democracia. Porque, de lo contrario, no únicamente será difícil caminar en democracia, sino también reconocer que las armas, los militares, los policías, son la negación de la política. Con razón alguien decía que, cuando no hay política, hay policías... y sobre todo militares, hoy, con la crisis de la policía, en labores policiales.

5. LA RESISTENCIA CONTRA EL GOLPE DE ESTADO

Como respuesta al golpe de Estado, que tuvo lugar el 28 de junio de 2009, surge el Movimiento Nacional de Resistencia, como un movimiento pacífico, que logra aglutinar a diversos sectores (organizaciones obreras, campesinas, maestros, mujeres, jóvenes, indígenas, grupos lésbicos y gays, profesionales, pobladores, artistas, escritores, sectores del Partido Liberal, sectores del Partido social demócrata, Partido de Izquierda Unificación Democrática) que se oponen al golpe de Estado.

El Movimiento Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado ha sido la mayor movilización de la historia del país; no sólo por la cantidad de ciudadanos y sectores movilizados, sino también por el tiempo que duró dicha movilización (más de 150 días en las calles en su primera fase), hasta que la represión y el decreto de Estado de sitio permanente logró contenerla. Además, por el carácter aglutinador del movimiento que convocó a los sectores menos conservadores de la sociedad hondureña, que creen en las salidas políticas y no en las militares de los problemas y conflictos. Como consecuencia, el Movimiento Nacional de Resistencia se ha constituido en uno de los actores y en una de las fuerzas sociales más importantes para la gobernabilidad democrática y para el futuro social y político del país, aun cuando los opositores se nieguen, muchas veces, a ese reconocimiento.

Si bien las protestas contra el golpe de Estado en Honduras desbordan la resistencia al neoliberalismo, sí es una protesta y una lucha contra las clases dominantes que articulan intereses económicos y políticos. Es una protesta contra un proyecto de dominación que niega la posibilidad de profundizar la democracia, contradictoriamente es también una protesta contra la ruptura del orden democrático. Se trata de un movimiento que, a mediano plazo, se plantea la posibilidad de una Constituyente, profundizar la democracia ofreciendo contenidos sociales a la misma, constituyéndose en un proyecto político alternativo al modelo bipartidista y tradicional hondureño. Aquí su reto es principalmente organizativo y de capacidad de movilización cuando ésta se requiera.

La organización de un movimiento de esta naturaleza fue permitida por la indignación de gran parte de la población hondureña por el golpe de Estado, pero también por la cercanía que mantuvo el entonces presidente Manuel Zelaya con las organizaciones sociales, una vez que tomó distancia de la élite política y económica para enfrentar algunos problemas de interés nacional. En este contexto se establecieron acuerdos con PETROCARIBE, posteriormente se suscribió al ALBA y se aumentó en 60% el salario mínimo. Asimismo, ante la oposición de los otros poderes del Estado y de las Fuerzas Armadas a la consulta del 28 de junio, la misma se llevaría a cabo con el apoyo de las organizaciones sociales. Por otra parte, el presidente

Zelaya, en relación con gobiernos anteriores dio un tratamiento distinto al magisterio nacional, un sector que en los últimos años ha tenido gran capacidad de movilización para reivindicar sus demandas. No es casual entonces que los maestros se convirtieran en uno de los sectores más constantes y comprometidos del Movimiento Nacional de Resistencia.

El Movimiento de Resistencia contra el Golpe de Estado surgió, en primera instancia, para restituir al presidente Zelaya, pero en la marcha, en la medida que se hacía difícil su restitución, cobra mayor fuerza el proyecto de éste de luchar por una Asamblea Nacional Constituyente, promover una sociedad alternativa al modelo excluyente de la oligarquía y los sectores tradicionales de poder en Honduras.

Como reconocen algunos autores (CESPAD y otros, 2009), además, el Movimiento de Resistencia se ha podido constituir y fortalecer porque ha sido de gran utilidad el aprendizaje acumulado de las organizaciones populares que durante las últimas tres décadas han librado sendas batallas por una sociedad alternativa, por el modelo flexible de organización, por la mayor horizontalidad de los liderazgos que valoran la autonomía regional, local y sectorial de las expresiones de resistencia a nivel nacional.

LAS FORMAS DE LUCHA

Si bien todavía está por verse el alcance de este movimiento social, éste ha hecho que, como reconoce la dirigencia nacional de la resistencia, nunca como esta vez los sectores populares estuvieran tan unidos, jamás se había tenido tanta conciencia de los derechos de los pobres ni se había demostrado tan claramente la naturaleza explotadora, totalitaria y asesina de los sectores dominantes.

El Movimiento Nacional de Resistencia ha sido muy creativo y diverso en sus formas de lucha, además de las formas tradicionales existentes. Las principales formas de lucha han sido las marchas y movilizaciones, la toma de calles y carreteras, las *pintas* de edificios. En momentos de mayor represión, cuando no ha sido posible una sola movilización, o como complemento de la movilización, se organizó la bullaranga (de cacerolas

y todo tipo de ruido contra los golpistas), la quema de llantas y la toma de las calles en los barrios y colonias.

En varias ocasiones y como complemento de la marcha se realizaron también caravanas de vehículos en la ciudad capital. Esta modalidad permitía evadir en algún grado la represión y a su vez facilitaba la participación de otros sectores que, por miedo o por otras razones, no se involucraban en las marchas. Destacan asimismo los conciertos y actividades artísticas, las voces contra el golpe de Estado.

Es de destacar, sin embargo, el significado de las movilizaciones en la calle. Aquella muy difundida idea de que en las calles está el poder cobra mucho sentido en un país donde los principales medios de comunicación estuvieron siempre a favor del golpe de Estado. Así en la primera fase, por más de 150 días, la resistencia tomó las calles, marchó en dirección de la ubicación física de los grupos de poder, contra los símbolos de poder y en otros momentos marchó en dirección contraria hacia los barrios y colonias donde se ubican los sectores más pobres de la capital, a quienes divulgaba sus luchas y proyectos y de quienes, además, buscaba su apoyo.

Como movimiento amplio ha contado siempre con la participación de los diversos sectores apuntados, pero destaca la participación amplia de jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad. Si los jóvenes han sido las principales víctimas de la represión y muchos de ellos han sido asesinados, las personas de la tercera edad, simbolizadas en las de mayor edad y mujeres, conocidas como las abuelas de la resistencia, han sido, con su participación activa, ánimo y constancia, un ejemplo heroico de lucha. Como constancia de lo anterior, la banda presidencial con la que el presidente Zelaya asumió el poder fue simbólicamente entregada al pueblo y de forma particular a una de las abuelas de la resistencia, el pasado 27 de enero de 2010. El mismo día que el golpe de Estado, por la asunción del nuevo gobierno, entraba en una nueva fase.

Mientras en las movilizaciones de la primera fase el Movimiento Nacional de Resistencia demandaba la restitución de Manuel Zelaya y hacía una protesta contra el golpe de Estado, en la segunda fase la resistencia recuerda a los miembros del nuevo gobierno que son la continuidad del golpe, que los que dieron el golpe y violaron los derechos humanos deben

ser castigados, y que la lucha por una nueva Constitución se mantiene. Esto es lo que se ha mostrado en las masivas manifestaciones del día 7 y 27 de enero y en las del 25 de febrero y 25 de marzo del 2010. Igualmente masiva fue la movilización del 1 de mayo y la movilización del 28 de junio que celebraba el primer año de resistencia.

La idea de que en la calle se construye el poder se vive cuando se rompe el orden de la ciudad con la toma de las calles, cuando la acción colectiva ofrece sentido y esperanza para seguir la lucha. La movilización y la toma de las calles son un espacio de encuentro, una forma de relanzar colectivamente el proyecto de la Constituyente. Entre otras cosas, con esto se recuerda que el golpe de Estado no se olvida y que por ello la lucha sigue.

LA REPRESIÓN CONTRA EL MOVIMIENTO NACIONAL DE RESISTENCIA

Según organismos de derechos humanos no oficiales que le han dado seguimiento a las violaciones de derechos humanos a partir del golpe de Estado, en el país han sido asesinadas 169 personas de la resistencia o familiares de éstos, muchos otros han sido amenazados y perseguidos, y hay más de 200 personas en el exilio. Los escuadrones de la muerte se activaron con el golpe de Estado y continuaron con el nuevo gobierno, lo cual da muestras de la continuidad que existe entre la ruptura del orden institucional y el gobierno que surgió con las elecciones del golpe. La Plataforma de Derechos Humanos también ha señalado que entre el segundo semestre de 2009, es decir, desde que ocurrió el golpe y el primer semestre de 2010, fueron ejecutados arbitrariamente 771 jóvenes menores de 23 años, en donde el Estado tiene responsabilidad directa o ha tolerado tales acciones.

El Movimiento de Resistencia ha vivido momentos muy difíciles por la represión desatada contra sus miembros desde que ocurrió el golpe el 28 de junio de 2009. Muchas manifestaciones fueron disueltas violentamente por militares y policías, cientos de manifestantes resultaron detenidos. Precisamente, para debilitar el poder que da la movilización en las calles, en los meses de octubre y noviembre de 2009 los manifestantes, en el lugar

de organización de la marcha, fueron literalmente cercados por policías hasta impedir la movilización de la resistencia.

Por otro lado, durante el gobierno de facto fueron muy frecuentes los toques de queda y la suspensión de garantías de las personas. En el mes de octubre de 2009 se estableció el Estado de Sitio, y esto prácticamente limitó toda posibilidad de movilización.

Además de la gravedad de los hechos mencionados, la investigación y la deducción de responsabilidad penal no han sido posibles en Honduras dado que el sistema de justicia está controlado por los sectores que dieron el golpe. Como prueba de lo anterior, días antes de la toma de posesión del “nuevo” gobierno los militares fueron absueltos de toda responsabilidad por violaciones a derechos humanos y de la responsabilidad por el golpe de Estado.

Por el contrario, muchas de las movilizaciones, como la de los maestros y la del sindicato de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ambos sectores forman parte del FNRP), aunque se trataran de luchas sectoriales, fueron criminalizadas. Mientras varios miembros del sindicato de la Universidad fueron despedidos y desalojados violentamente de una huelga de hambre que realizaban en protesta por los despidos, su principal dirigente fue sometido a juicio por las protestas, luego de ser separado del fuero sindical. En el caso de los dirigentes magisteriales, después de realizar movilizaciones con miles de maestros fueron igualmente enjuiciados, aunque posteriormente recuperaron su libertad. Y como si esto fuera poco, recientemente se ha promovido la Ley Antiterrorista con un propósito muy definido: desmovilizar y destruir al FNRP.

LOS LOGROS DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE RESISTENCIA

Honduras se había caracterizado por una relativa estabilidad política debido a la capacidad de acuerdos entre las élites, con base en un bipartidismo tradicional. El golpe de Estado sacudió dicha estabilidad y dividió al país entre los que promovieron y apoyaron el golpe y los que se opusieron al mismo. Esta ruptura asume las características de una división de clases que desmitifica la estabilidad política y revela el carácter de exclusión

y dominación nacional e internacional de los grupos tradicionales y no tradicionales de poder.

Lograr mantener una población movilizadada por mucho tiempo (más de 150 días) y por su carácter masivo, a pesar de la represión, es algo inédito en la historia política del país. La Resistencia como movimiento pacífico se enfrentaba así en situación muy desigual a una derecha armada que, además, contaba con el apoyo de todos los medios de comunicación que tradicionalmente han tenido gran influencia en el país. No obstante lo anterior, el movimiento logró sortear estos obstáculos tal y como se ha mostrado en las grandes manifestaciones del día 15 de septiembre de 2009 y, posteriormente, el 7 de enero de 2010 cuando, entre otras cosas, se protestaba contra la impunidad de los militares; o en la manifestación del día 27 de enero para despedir al presidente Zelaya que abandonaba su cautiverio de la Embajada de Brasil en Honduras, rumbo a un “exilio honroso” en República Dominicana, después que se había establecido en esta embajada para encontrar salidas negociadas a la crisis política. Sin embargo, la prueba de fuego para la resistencia han sido las manifestaciones del 25 de febrero y 25 de marzo de 2010 y las que con posterioridad tuvieron lugar porque ya no se contaba con la cercana “presencia” y el liderazgo de Manuel Zelaya. Las manifestaciones fueron igualmente masivas, lo que da cuenta de que en la actualidad no hay posibilidades de reconciliación y de gobernabilidad en el país si no se cuenta con la Resistencia.

De esta forma, la Resistencia se ha constituido en un movimiento social fundamental para la vida del país y en una fuerza política capaz de debilitar y acabar por primera vez con el conservador bipartidismo que data de finales del siglo XIX. Esto es posible y deseable porque el movimiento ha tenido la capacidad de aglutinar a diversidad de sectores políticos y sociales. Como reconocen los principales líderes de la Resistencia, al destacar en uno de sus comunicados (27 de enero 2010): nunca en la historia, las organizaciones sociales y populares estuvieron tan unidas como esta vez. Si bien el golpe de Estado supone un retroceso político con impactos económicos, sociales y humanos devastadores para el país y para la propia resistencia, paradójicamente el carácter de la crisis afecta también de

forma positiva la constitución de una fuerza social para la construcción de alternativas al modelo económico y político excluyente.

Ahora bien, la Resistencia como movimiento social tiene presencia en varias regiones y municipios del país cuyas experiencias presentan dinanismos particulares y con autonomía para realizar sus propias acciones, sin descuido y sin mayores contradicciones con las acciones y la coordinación nacional que, por su parte, se relaciona con éstas de forma horizontal. En este sentido el movimiento apunta hacia adentro y hacia afuera, sin dejar de lado el reconocimiento de la diferencia, a la mayor democratización posible. El tiempo es una prueba de fuego para el movimiento y los cambios que ocurran marcarán sus condiciones de posibilidad.

Por otro lado, la indignación provocada por el golpe y el papel jugado por la Resistencia, en tanto ha asumido este malestar y lo ha encauzado hacia la búsqueda de alternativas, ha contribuido al cultivo de una energía social (que fomenta nuevos liderazgos y activa otros que se habían desencantado o simplemente acomodado al orden existente), disponible para contribuir a profundizar la democracia y el desarrollo alternativo.

La Resistencia es también una identidad. La división provocada y desvelada por el golpe de Estado está muy presente en la sociedad hondureña y se expresa en ser o no golpista, aun cuando los pertenecientes a este último grupo tratan por todos los medios (además de cómo el poder mediático se emplea a fondo para normalizar la vida nacional) de no referirse al tema y de olvidarlo y promover su olvido con todos los recursos posibles. Y como si el esfuerzo nacional fuera poco, Estados Unidos contribuye con sus poderosos medios a limpiar el golpe. Frente a esta realidad y por el carácter de un movimiento amplio que acoge diversas identidades reconociéndolas y por representar un proyecto compartido por todas estas identidades, es por tanto una identidad colectiva en otro nivel que apuesta por potenciarlas desde la lucha por una política incluyente en todos los niveles posibles. Así, con orgullo son muchos los hondureños y hondureñas que suelen decir “soy de la resistencia”, “estoy con la resistencia”, “viva la resistencia”. Aunque sienten un gran malestar por lo ocurrido el 28 de junio de 2009, es tal la indignación que también se grita con dignidad a los

otros: “golpistas, golpistas”, y se grita además la responsabilidad criminal que sobre sus espaldas éstos llevan.

La resistencia ha creado por otra parte, un espacio virtual que reúne la diversidad de experiencias comunicativas de los distintos sectores que conforman el FNRP. Esta experiencia del uso de Internet había surgido desde el mismo día que ocurrió el golpe como una alternativa de comunicación, junto al teléfono móvil, frente al bloqueo de los medios de comunicación. La facilidad del texto más la verdad violenta de la imagen cuando no hay manipulación, fueron fundamentales para que a nivel internacional se conociera lo que en ese momento acontecía en Honduras. Hoy es un espacio de denuncia, de intercambio de información y comunicación de las actividades, una plataforma de análisis y de debate alimentada de forma horizontal por todos los miembros de la resistencia, sobre todo de aquellos que tienen acceso a este tipo de tecnología.

A MANERA DE CIERRE. LOS RETOS DEL MOVIMIENTO NACIONAL DE RESISTENCIA

El Movimiento Nacional de Resistencia entendió que una vez que el golpe no se pudo revertir, y con la llegada del “nuevo gobierno”, que es su continuidad, se entró en una nueva fase donde la movilización en las calles ya no es suficiente y tampoco es sostenible. En esta segunda fase la lucha pasa por organizarse para la Constituyente, fortalecerse como fuerza política para las próximas elecciones, exigir a nivel nacional e internacional que se castigue a los responsables del golpe de Estado y a todos aquellos que cometieron abusos de derechos humanos.

Para lograr estos objetivos, el Movimiento Nacional de Resistencia entiende que en esta segunda fase el trabajo pasa por la organización, la movilización, la concientización, la formación. ¿Cómo hacer para que las distintas organizaciones y sectores a nivel nacional se articulen para orientarse en esa dirección y se puedan manejar adecuadamente las luchas sectoriales? Este es el gran reto. Sin embargo, aspirar a una Constituyente no es suficiente si no es posible experimentar ya las bases de esa nueva sociedad a la que se aspira. Si se quiere tomar el poder para cambiar la sociedad, es también importante iniciar el camino inverso para evitar el

vacío de contenido (tomando en cuenta que la Constituyente puede llevar tiempo o porque la misma sólo es un instrumento para una sociedad alternativa) y/o darse cuenta de la necesidad de acumular poder y experiencia para consolidar ese proyecto de sociedad.

Para tomar el poder, quizá sea necesario acumular poder pero también transformar el poder. Después de que, paradójicamente, el Frente Nacional de Resistencia con la recolección de un millón 300 mil firmas (septiembre 2010) forzara al gobierno actual, más la presión internacional de no reconocimiento o de bajo reconocimiento, a realizar cambios en la legislación, el gobierno ha planteado la necesidad de hacer reformas constitucionales para realizar una consulta y abrir la posibilidad de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. De esta forma, el gobierno actual, que busca reconocimiento internacional y convencer internamente con un proceso de reconciliación nacional, se adelanta y pretende dejar sin bandera al FNRP. Sin embargo, el FNRP continúa sin reconocer ese proceso además de negarse al proceso de diálogo que ha convocado el presidente Lobo.

Ese es quizá uno de los mayores retos que enfrenta en la actualidad el FNRP. No se trata sólo de la pretensión del gobierno de dejar sin bandera al FNRP con una convocatoria a una Asamblea Constituyente sin el carácter popular y democrático que éste le quiere dar a la misma, sino también una hábil jugada de una parte de la derecha hondureña que participó en el golpe de Estado para neutralizar al FNRP, jugando en su mismo terreno.

Todo ello ha generado un gran debate al interior del FNRP y, en general, en la sociedad hondureña. El FNRP comienza a definir escenarios donde uno de ellos se asocia con la pretensión del gobierno de convocar a la Asamblea Constituyente y el papel que jugaría el mismo Frente en caso de que este escenario tenga lugar; al interior del FNRP, esto implica conocer los contenidos, el proceso y las implicaciones de una Asamblea Nacional Constituyente para responder al debate que el primer escenario ha generado y para orientar el propio proceso que el FNRP desea seguir como segundo escenario. Valga decir que estos acontecimientos, aun en curso, han tomado al FNRP sin mayor preparación, lo que quizá se explique,

en cuanto a búsqueda de alternativas, por la novedosa experiencia política que se vive en el país.

Con el tiempo, sin embargo, el escenario que prevaleció luego de los acuerdos de Cartagena y el retorno de Manuel Zelaya, es la participación en las próximas elecciones de 2112 y 2013. El Frente logró inscribir su partido Libertad y refundación (LIBRE) y se prepara para una contienda interna para elegir no a la candidata del partido que ya ha sido acordada entre los cinco movimientos, sino para elegir los cargos de alcaldes y diputados. Y desde aquí preparase para las elecciones generales. El escenario es sumamente atractivo, en tanto es la primera vez en la historia política del país que el bipartidismo enfrentará una oposición y una fuerza social con capacidad de disputar el poder político. Hay que destacar, sin embargo, que el FNRP no llega del todo fortalecido. Varias facciones radicales y que se oponen a la vía electoral, no están conformes con la decisión de participar en las próximas elecciones en una coyuntura y en un terreno que el bipartidismo y la derecha controla. El bipartidismo está golpeado pero no muerto. Será difícil derrotar a este bipartidismo que tiene los medios de comunicación a su lado, que tiene el control del sistema electoral, que tiene recursos económicos para comprar votos y poder represivo para intimidar y que, además, cuenta con el beneficio que le otorga la persistencia de una cultura política tradicional, autoritaria y clientelar que domina el paisaje hondureño. Si bien unas elecciones no polarizadas por la participación de nuevas fuerzas electorales pueden dispersar el voto conservador y el Partido Libre tal vez pueda sumar también el descontento de algunos liberales o la indecisión de otros que no se ven representados por el candidato ganador de las internas, esta contienda será una prueba de fuego para convencer a aquellos que se opusieron al golpe, pero que no siguen a Libre, a los indecisos que no tienen partido, como a los que dudan de la vía electoral.

Si el frente ya tiene claro los significados y los procesos para alcanzar una Asamblea Nacional Constituyente, debe definir y preparar su estrategia electoral como la vía para la Constituyente y para llevar adelante un proyecto de sociedad alternativa; debe definir este último como fundamento de la Constituyente y de la estrategia política, preparando los

cuadros necesarios para un nuevo gobierno, aun de pequeña escala, como una forma de acumular poder sin olvidar que antes y después de tomar el poder es decisivo transformar el poder. Los medios de comunicación, como hasta ahora, cercanos al frente, jugaran aquí un rol de primer orden en la batalla cotidiana y estratégica de la lucha por la hegemonía de un proyecto alternativo.

El Movimiento Nacional de Resistencia debe experimentar desde ya (o acumular poder para ello) el modelo de sociedad al que aspira, desde una nueva economía que satisfaga las necesidades básicas, desde una nueva política que experimente en distintos niveles la participación ciudadana, desde una nueva racionalidad ambiental, desde la promoción de relaciones de género equitativas. Las próximas elecciones generales, afortunadamente, no definen todo. En este marco la acumulación de poder es importante, como muchas experiencias de América del Sur; de allí que la sociedad civil o los gobiernos locales son ámbitos sobre los que la Resistencia tiene o puede tener incidencia por las organizaciones que la conforman o porque sobre el espacio local, sin descuido de las acciones nacionales, se puede experimentar y exigir modelos de auditoría social o de presupuestos participativos. Por esto, el Movimiento Nacional de Resistencia requiere la articulación de un proyecto cultural capaz de disputar la hegemonía de las lógicas de poder y de exclusión, abierto a las subjetividades alternativas, con un plan de movilización social con sus expresiones políticas. Adicionalmente, dicho Movimiento tiene que ejercer la presión social y política en momentos de oposición para acercarse a sus principales objetivos.

Antes, sin embargo, el FNRP y su brazo político deberá sortear, por un lado, los obstáculos del régimen desde la represión y la desmovilización hasta cualquier jugada política y extra política de la derecha por frenarlo y debilitarlo (como la reforma al artículo 5 de la Constitución, entre otros) y, por el otro lado, las propias dificultades internas, dado el carácter de un movimiento amplio donde pesan las tradiciones de una izquierda que en su momento discute y continúa discutiendo las diferentes vías para “tomar el poder” y lograr la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente.

BIBLIOGRAFÍA

- Arancibia, Juan (1988), *Honduras: ¿un estado Nacional?* Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras.
- Barahona, Marvin (2005), *Honduras en el siglo xx. Una síntesis histórica*, Editorial Guaymuras, Tegucigalpa, Honduras.
- Call, José (2010), “Estado y elites en la historia de Honduras. Reflexiones sobre su situación actual”, *Memorias del III Congreso de Investigación científica*, IUDPAS, UNAH.
- Carias, Marcos (2007), *De la patria del criollo a la patria compartida. Una historia de Honduras*, Ediciones Subirana, Tegucigalpa.
- Euraque, Darío (1996), *Estado, poder, nacionalidad y raza en la historia de Honduras: ensayos*, Ediciones Subirana, Tegucigalpa.
- Molina, Guillermo (1985), *Estado liberal y desarrollo capitalista en Honduras*, Editorial Universitaria, Tegucigalpa, Honduras.
- ____ (1998), “Honduras: de la guerra civil al reformismo militar” en *América Latina: historia de medio siglo*, vol. 2, UNAM.
- Murga, Antonio (1985), *Enclave y sociedad en Honduras*, Editorial Universitaria, Tegucigalpa, Honduras.
- Posas, Mario (2009), “Cambio y continuidad en la Honduras de hoy” en *Las ideas políticas en Honduras*, FOPRIDEH, Tegucigalpa, Honduras.

NOTAS

¹ Contrario a los diferentes usos (no siempre problematizados ni suficientemente aclarados) que se hace del término “oligarquía” en América Latina y en especial en Honduras, aquí se entiende que oligarquía no es una clase social sino una forma de ejercer la dominación que conlleva la concentración del poder por una minoría de personas que pertenecen a sectores o clases sociales que detentan el poder económico y político, que implica por tanto la exclusión de la mayoría de la población de ese poder, que ejerce el poder preferentemente de forma represiva, que realiza la organización de esta dominación con un reclutamiento cerrado de los que ejercen funciones de gobierno y que puede funcionar como redes familiares o no familiares, que usa el clientelismo, el autoritarismo y otras formas tradicionales de

control del poder, que instrumentaliza partidos y la forma misma de la democracia. Este dominio hace referencia a sociedades particularmente agrarias en el periodo primario exportador, pero en este caso se extienden más allá de éste. Véase Waldo Ansaldi, “La oligarquía en América Latina: esa frívola y casquivana mano de hierro en guante de seda”, *Socialismo y participación*, núm. 56, CEDEP, Lima, 1991.

² Froilán Turcios protesta en 1924 contra la presencia de *marines* estadounidenses en Honduras que, por ocasión de la guerra civil, habían desembarcado para proteger los intereses de las empresas norteamericanas.

Fecha de recepción: 9 de septiembre de 2011

Fecha de aceptación: 2 de noviembre de 2011